

**DCNI.CD.128.25**

Ciudad de México a 24 de julio de 2025

**Dr. José Campos Terán**

Presidente del Consejo Divisional

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

**P r e s e n t e**

Por medio de este conducto, le hago llegar el dictamen correspondiente al caso revisado por la Comisión Encargada de Conocer y Dictaminar sobre las Faltas cometidas por el Alumnado de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.

Lo anterior en apego al artículo 32 del reglamento del alumnado que establece que "Una vez que la secretaría académica o la secretaría de unidad reciban el recurso de reconsideración, convocarán de inmediato a la comisión de faltas divisional para que lo dictamine, o a la especializada de unidad, para que lo resuelvan, según corresponda, dentro de los diez días hábiles siguientes.

La comisión de faltas divisional emitirá el dictamen fundado y motivado en el que propondrá la resolución y, a más tardar al día hábil siguiente, lo enviará a la persona titular de la presidencia del consejo divisional para que lo incluya en el orden del día de su próxima sesión".

Sin otro particular, aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

"Casa abierta al tiempo"

**Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarría**

Secretaria Académica de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería



Ciudad de México a 23 de julio de 2025.

### DICTAMEN R.02.2025

**QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER Y DICTAMINAR SOBRE LAS FALTAS COMETIDAS POR EL ALUMNADO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA, SOBRE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR [REDACTED], EN ADELANTE F.M.B., MATRÍCULA [REDACTED] ALUMNO DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS APLICADAS.**

### ANTECEDENTES

- I. El Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería en su Sesión CUA-DCNI-278-25, efectuada el 30 de abril de 2025, integró la Comisión Encargada de Conocer y Dictaminar sobre las Faltas Cometidas por el Alumnado de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.
- II. El Consejo Divisional integró esta Comisión con las siguientes personas integrantes y asesoría:

#### Integrantes:

##### a) Órganos personales:

- Dr. Gerardo Pérez Hernández, Jefe del Departamento de Ciencias Naturales.

##### b) Representantes del personal académico:

- Dra. Cynthia Gabriela Sámano Salazar, del Departamento de Ciencias Naturales;
- Dra. Daniela Aguirre Guerrero, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.

##### c) Representantes del alumnado:

- C. Daniel Olvera Rojas, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas;
- C. Alexandra Bonilla García, del Departamento de Ciencias Naturales.

Asesoría:

- Mtra. Isela Carolina Tinoco Marquina. Abogada Delegada de Legislación Universitaria.

Posteriormente, con fundamento en el artículo 62 del (RIOCA), se nombraron a las siguientes personas para atender entrevistas y consultas:

- Dr. Arturo Sotelo Gutiérrez. Defensor Adjunto de Derechos Universitarios (DDU).

III. Con fecha 23 de junio de 2025 el Consejo Divisional de la DCNI celebró su **Sesión CUA-DCNI-282-25** de manera privada, con fundamento en el artículo 37 del RIOCA, y para único efecto, para resolver sobre el Dictamen DCNI.CF.02.25 que presenta la Comisión Encargada de Conocer y Dictaminar sobre las Faltas Cometidas por el Alumnado de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.

IV. En la misma Sesión CUA-DCNI-282-25 el Consejo Divisional emitió el Acuerdo DCNI-02-282-25 que resolvió, en su parte conducente:

*“Aplicar al alumno F.M.B. [REDACTED], matrícula [REDACTED] alumno de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas la medida administrativa de **Suspensión por dos trimestres**, con fundamento en el artículo 16, fracción II del Reglamento del Alumnado.”*

V. Inconforme con dicha resolución F.M.B. [REDACTED] presentó recurso de reconsideración con fecha 9 de julio de 2025, en el cual presentó argumentos y pruebas que consideró pertinentes para solicitar la modificación o cancelación de la medida administrativa que le fue impuesta. La Secretaría del Consejo Divisional acusó de recibido documento descrito en el numeral anterior.

VI. Con fundamento en el artículo 32 del Reglamento del Alumnado y en el Transitorio Cuarto de la reforma al Reglamento del Alumnado relacionada con la prevención, atención y



sanción de conductas relacionadas con violencia por razones de género, aprobada por el Colegio Académico en la sesión 560 y publicada el 24 de marzo de 2025, la Secretaria del Consejo Divisional, convocó inmediatamente a esta Comisión y remitió la documentación a la que se hace referencia en el numeral anterior.

VII. La Comisión contó con los siguientes insumos:

1. Escrito de recurso de reconsideración por parte del alumno F.M.B. [REDACTED]. A dicho escrito se adjuntó la documentación previamente presentada en la etapa de pruebas y alegatos además de 5 testimonios entregados el 9 de julio de 2025.
2. Entrevista vía zoom realizada a la alumna K.N.P.E. [REDACTED], el 17 de julio de 2025.
3. Entrevista presencial realizada a F.M.B. [REDACTED] señalado como responsable de la falta, el 17 de julio de 2025.
4. Reglamento del Alumnado.

VIII. La Comisión se reunió los días 11, 17 y 23 de julio de 2025. En esta última fecha concluyó sus trabajos con la firma del presente Dictamen.

- IX. Durante sus trabajos, la Comisión permitió que el alumnado involucrado ejercitara todos sus medios procesales de defensa, respetando en todo momento sus derechos humanos incluido el pleno ejercicio de garantía de audiencia y el principio de presunción de inocencia, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos Tratados Internacionales, así como el equilibrio procesal y la debida diligencia.
- X. La Comisión respetó los derechos del alumnado involucrado, y en lo particular, los derechos previstos en el artículo 21 del Reglamento del Alumnado. Asimismo, procedió al análisis integral de los documentos y el contenido de las entrevistas, deliberó sobre el caso tomando en cuenta todos los argumentos y el material probatorio aportado por las personas involucradas.

## CONSIDERACIONES

### I. COMPETENCIA.



El Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa es un órgano de gobierno de esta Universidad, el cual tiene su fundamento legal en los artículos 6, fracción VII, 28 y 29 de la Ley Orgánica de la UAM, 43 y 46 del Reglamento Orgánico, y 10 del Reglamento del Alumnado de esta Institución, los cuales indican:

### *Ley Orgánica*

#### **“ARTÍCULO 6**

***Serán órganos de la Universidad:***

...

*VII. Los Consejos Divisionales;*

#### **ARTÍCULO 28**

*Por cada División funcionará un Consejo Divisional, que se integrará por:*

- I. El Director de la División, quien lo presidirá;*
- II. Los Jefes de Departamento de la misma División; y*
- III. Un representante del personal académico y otro de los alumnos por cada departamento.*

*El representante del personal académico y el de los alumnos durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.*

#### **ARTÍCULO 29**

*Corresponde a los Consejos Divisionales:*

- I. Formular los planes y programas académicos de la división para los efectos de la fracción I del artículo 23 de esta ley;*
- II. Designar a los Jefes de los Departamentos que integren la división, de las ternas que les propongan los respectivos Rectores;*
- III. Presentar al Consejo Académico respectivo el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la división;*
- IV. Planear el desarrollo y funcionamiento de la división;*
- V. Aprobar los proyectos de investigación que se propongan dentro de la división;*
- VI. Cuidar que el personal académico y administrativo cumpla eficazmente las funciones de su competencia; y*
- VII. Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento y las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.*

### *Reglamento Orgánico*

#### **ARTÍCULO 43**

*Los consejos divisionales estarán integrados en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana.*



Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**  
Unidad Cuajimalpa



Dos décadas construyendo futuros en el poniente

## **ARTÍCULO 46**

*Compete a los consejos divisionales:*

- I. *Presentar oportunamente ante el consejo académico el anteproyecto para el año siguiente del presupuesto anual de ingresos y egresos de la división, conforme a los calendarios emitidos por las instancias competentes para estos efectos;*
- II. *Formular los planes y programas académicos de la división considerando el apoyo que puedan otorgar los departamentos de la misma a otros departamentos de la Universidad;*
- III. *Aprobar los proyectos de investigación de la división, o la parte correspondiente de los proyectos interdivisionales, y promover el apoyo presupuestal que se requiera;*
- IV. *Promover proyectos de investigación interdisciplinaria en cada departamento, entre sus departamentos y con departamentos de otras divisiones;*
- V. *Determinar anualmente las necesidades del personal académico que presenten las personas titulares de las direcciones de división, para desarrollar los planes y programas académicos;*
- VI. *Proponer ante el consejo académico la emisión de instructivos y emitir lineamientos particulares para el desarrollo y funcionamiento de la división;*
- VII. *Autorizar el periodo sabático menor de un año, en función de las necesidades de los planes y programas de la división. Así como conocer y emitir recomendaciones, en su caso, en relación con el disfrute del sabático igual o mayor de un año;*
- VIII. *Enviar, a la persona titular de la rectoría de unidad, el informe anual del funcionamiento de la división;*
- IX. *Determinar las modalidades de la auscultación para designar a las personas titulares de las jefaturas de departamento, a partir de que reciban las ternas de candidaturas que les presenten las rectorías de unidad.*  
*Las modalidades deberán permitir que la comunidad universitaria se exprese sobre la trayectoria académica, profesional y administrativa de cada candidatura, con pleno respeto a la dignidad de las personas, y que cada representante realice las consultas e informe el resultado de ellas al consejo divisional;*
- X. *Proponer ante los consejos académicos, a solicitud de la persona titular de la jefatura del departamento correspondiente, la creación, modificación o supresión de las áreas académicas.*

*En caso de que la propuesta considere la participación de dos o más departamentos de la Universidad, se observará lo siguiente:*

- a) *Las presidencias de los consejos divisionales involucrados conformarán, de entre las y los integrantes de éstos, una comisión paritaria, para dictaminar las propuestas.*
- b) *Los consejos divisionales involucrados determinarán el procedimiento para la creación, modificación o supresión de estas áreas académicas;*
- VII. *Aprobar la programación anual de las unidades de enseñanza-aprendizaje;*
- VIII. *Evaluar anualmente los resultados del desarrollo de los planes y programas académicos de la división;*



División de Ciencias  
Naturales e Ingeniería

Unidad Cuajimalpa  
DCNI | División de Ciencias Naturales e Ingeniería  
**Consejo Divisional**



- IX. *Aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación o supresión de líneas editoriales de la división;*
- X. *Ratificar a quienes integrarán los consejos y comités editoriales, a propuesta de las personas titulares de las direcciones de división, y*
- XI. **Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.**

**Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad de género, así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo tipo de violencia.**

### **ARTÍCULO 83**

**Corresponde a la persona titular de la secretaría académica de división:**

- I. *Colaborar con la persona titular de la dirección de división en las actividades de planeación, evaluación y apoyo académico de la división;*
- II. *Servir de enlace de la división con los sistemas escolares que atañen a la misma;*
- III. *Realizar tareas de enlace y coordinación de las actividades que se efectúan entre los departamentos y las instancias administrativas de la secretaría de la unidad;*
- IV. **Fungir como persona titular de la secretaría del consejo divisional** y administrar la Oficina Técnica del mismo;
- V. *Certificar y **publicar las informaciones del consejo divisional** y de las que correspondan a sus funciones;*
- VI. *Llevar el archivo de la producción académica de la división;*
- VII. *Reunir la información académica relativa al alumnado y al personal académico de la división y en su caso, proporcionar la información a los órganos e instancias que lo soliciten;*
- VIII. *Informar por escrito anualmente a la persona titular de la dirección de división de las actividades a su cargo;*
- IX. *Realizar las funciones y las actividades que le asigne, por delegación, la persona titular de la dirección de división;*
- X. *Proporcionar a las comisiones dictaminadoras la información relativa a los planes y programas académicos de la división, y*
- XI. *Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.*

**Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo tipo de violencia.**

### **Reglamento del Alumnado**

#### **“ARTÍCULO 10**

*El conocimiento y resolución de las faltas, así como del recurso de*



reconsideración, estarán a cargo de:

- I. *El consejo divisional, en los casos de las faltas previstas en los artículos 8, fracciones I a la XX y 9, fracciones I a la III. Para ello conformará, de entre sus integrantes, la comisión de faltas divisional que las dictaminará.*
- II. *La comisión especializada de unidad, cuando se trate de las faltas previstas en los artículos 8, fracción XXI y 9, fracciones IV a la VI. Esta comisión se regirá por el principio de buena fe.*

*TRANSITORIO CUARTO DE LA REFORMA RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE CONDUCTAS RELACIONADAS CON VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO PUBLICADA EN EL SEMANARIO DE LA UAM EL 24 DE MARZO DE 2025*

*Los procedimientos de faltas iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, pero antes de la conformación de las comisiones especializadas de unidad, serán atendidos y resueltos por las comisiones de faltas y los consejos divisionales, por lo que en estos casos no les serán aplicables los artículos 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 de este Reglamento.*

Derivado de lo anterior, este Consejo Divisional es competente para resolver las controversias tratándose de faltas del alumnado, incluido el recurso de reconsideración.

## **II. ANALISIS DE LOS APARTADOS “HECHOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Y AGRAVIOS” EXPRESADOS POR EL RECURRENTE.**

La Comisión comenzó su análisis revisando el escrito presentado por el recurrente, el cual se estructura en los apartados: Hechos en contra del Dictamen, Agravios, Petición y Pruebas.

El artículo 31 del Reglamento del Alumnado establece que en el recurso de reconsideración deben expresarse argumentos contra la resolución y permite la presentación de pruebas supervenientes. Aunque el escrito inicia con cuestionamientos sobre la actuación de la Comisión y no con nuevos elementos probatorios o de fondo, en atención al principio de no dejar en estado de indefensión, la Comisión decidió analizar el recurso en el orden en que fue presentado. Esta decisión no implica validación del contenido, ni reconocimiento de jerarquía, importancia, valor probatorio o de fondo entre los apartados.

## II.1 HECHOS EN CONTRA DEL DICTAMEN

El recurrente expresó en su escrito:

*"1 Violación al principio de presunción de inocencia. El derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el Artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Artículo 2, fracción III del Código de Ética de la UAM, y los Artículos 29 y 30 del Reglamento del Alumnado de la UAM, fue violado en mi perjuicio. A pesar de haber presentado un escrito de defensa con más de 60 páginas y 26 testimonios de respaldo (entre docentes y estudiantes), dichas pruebas fueron ignoradas o desestimadas sin motivación razonada, privilegiando exclusivamente los testimonios de la parte denunciante. Como muestra de ello, en el dictamen se afirma: "La Comisión le cuestionó sobre el hecho de la seña obscena en clase porque en su escrito de pruebas y alegatos no señaló nada respecto, el alumno manifestó que no quiso responder porque era una mentira y que responder habría sido darle importancia a algo que no la tiene pero que negaba rotundamente haber realizado dicha seña obscena, aún más señaló que durante la clase él se encontraba junto al profesor E.M.O., por lo que el profesor se habría dado cuenta de dicha seña obscena." \*15. Entrevistas con el profesorado, Dictamen 02.2025. Y más adelante: "Sin embargo, del estudio de las testimoniales basándose en la metodología de la psicología del testimonio... la Comisión le otorga veracidad al evento descrito." \*16. Entrevistas con el alumnado testigos directos de los hechos analizados, Dictamen 02.2025. Estos fragmentos evidencian que la Comisión asumió como verdaderos los dichos de una de las partes sin que mediara una valoración objetiva de las pruebas en su conjunto, ni se respetara el principio de in dubio pro reo. Se invirtió indebidamente la carga de la prueba y se emitió un juicio condenatorio sin certeza plena ni motivación debidamente fundada en derecho lo que constituye una forma de valoración arbitraria, carente de objetividad, y en consecuencia, vulnera el debido proceso. Esto contraviene el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sostenido en múltiples ocasiones, por ejemplo, en la 1a./J. 3/2014 (10a.), que: "El principio de presunción de inocencia se proyecta como una garantía mínima del debido proceso, no solo en materia penal sino también en procedimientos administrativos sancionadores, lo que implica que la carga de la prueba recae en la autoridad y que toda duda razonable debe resolverse a favor del presunto infractor".*

Se advierte que el recurrente esencialmente argumenta que la Comisión emitió un juicio condenatorio sin certeza plena ni motivación debidamente fundada en derecho, lo que considera que contraviene los principios de *in dubio pro reo* y de presunción de inocencia.

El recurrente esencialmente argumenta que la resolución que combate transgrede el principio de presunción de inocencia en su perjuicio, y cita un fragmento de una tesis de jurisprudencia.

La Comisión valoró que la presunción de inocencia es un elemento esencial para la



realización efectiva del derecho a la defensa y que debe acompañar al presunto responsable durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia o resolución condenatoria que determine su responsabilidad quede firme.

En este sentido, procedió a consultar con la Coordinación de Sistemas Escolares y constató que al día 23 de julio de 2025, el alumno se encuentra inscrito a una UEA y a la fecha no cuenta con ninguna medida administrativa en su expediente escolar, lo que permite establecer que se ha respetado el principio de presunción de inocencia que impide a cualquier autoridad anticipar la imposición de una sanción sin haber desahogado el procedimiento legal, de manera fundada, motivada y exhaustiva para su imposición.

Asimismo, la Comisión procede a revisar las constancias que forman parte del Dictamen 02.2025, de donde se advierte que en el presente caso, el recurrente ha gozado de la presunción de inocencia, en términos de lo previsto en el artículo 21, fracción II, inciso b) del Reglamento del Alumnado, durante toda la tramitación del procedimiento ya que fue notificado personalmente de los antecedentes del caso, mediante oficio, en el cual se le hizo saber que contaba con todos los medios procesales de defensa, entre los que se encuentra la oportunidad de ofrecer los medios probatorios que estimó pertinentes y de contar con la asesoría de especialistas, y de ser escuchado tanto por la Comisión de faltas, como por el Pleno del Consejo Divisional.

Esta Comisión procedió a revisar integralmente el Dictamen 02.2025, e identificó que la resolución que impugna el recurrente contiene la identificación de tres conductas concretas que F.M.B desplegó en contra de integrantes de la comunidad universitaria y sus implicaciones, siendo dichas conductas, visibles en la foja 17 del Dictamen de mérito:

- El 30 de septiembre de 2024, durante la clase de la UEA Optimización II, el alumno F.M.B. realizó, sin que fuera percibido por el profesor, con sus manos una señal de contenido sexual dirigido a una compañera que se encontraba exponiendo y que aunque la compañera prosiguió su exposición, el resto del alumnado que se percató de dicha señal se sintió incómodo.
- El 8 de marzo de 2025, en el grupo de WhatsApp al que pertenece todo el alumnado involucrado, F.M.B. publicó un sticker de una figura masculina golpeando a una figura femenina, que él mismo elaboró con una plantilla, al cual le añadió las palabras "Cállate N. [REDACTED]", justo después de un comentario académico que realizó la alumna N.G.V.M. La publicación obtuvo alrededor de 20 reacciones de "Me divierte".



- Durante clases, en los trimestres 24-O y 25-I, el alumno F.M.B. ha realizado comentarios racistas, sexistas y discriminatorios, al interior del salón de clases y en voz alta. Si bien, los realizó con sus amigos más cercanos, fueron percibidos por varios integrantes del alumnado que se sintieron molestos e incómodos, sobre todo por que el contenido sexista de sus comentarios en grupos donde la mayoría son hombres.

La Comisión revisó la totalidad del Dictamen 02.2025 y, en particular, las fojas de la 7 a la 17, en las que consta la valoración de las pruebas realizadas. Se advierte que la Comisión analizó las Actas Circunstanciales de Queja suscritas por N.G. V.M. y N.A.P.C., las constancias escritas de las personas que manifestaron haber presenciado directamente los eventos del 30 de septiembre de 2024, del 8 de marzo de 2025 y lo ocurrido durante los trimestres 24-O y 25-I; también se analizó el escrito que N.G.V.M. presentó como desahogo al escrito de pruebas y alegatos de F.M.B., una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp y cuatro recortes parciales de escritos que exhibió F.M.B., así como las entrevistas realizadas a las alumnas en situación de víctima, al alumno F.M.B., a tres integrantes del profesorado y a seis integrantes del alumnado que refirieron haber presenciado directamente los hechos ya señalados.

La Comisión analizó de manera concatenada todos los medios probatorios señalados y corroboró que todos coincidían en las tres conductas identificadas, las cuales constituyen elementos suficientes para generar certeza respecto de las imputaciones realizadas al hoy recurrente, **desvirtuando así la presunción de inocencia a su favor**, sin que subsistiera duda razonable que pudiera beneficiarle. Todo ello fue señalado de manera fundada y motivada en la determinación que ahora se impugna, por lo que resulta infundado alegar violación a los principios de presunción de inocencia o ***in dubio pro reo***, como pretende hacer valer.

El recurrente expresó:

***"2. Filtración de información por parte de testigos acusadores.** Desde la primera reunión celebrada el 28 de abril de 2024, presenté evidencia concreta de que la información del proceso estaba siendo filtrada por la testigo J.Y.L.A. de la parte acusadora, sin que se iniciara investigación alguna al respecto. "... Si mi compañera J.Y.L.A hablo de la situación fue antes de las medidas de seguridad para ambas partes, ya que el mensaje fue del 11 de abril de 2025..." \*9.-Escrito de N.G.V.M. como desahogo de la vista al escrito de pruebas y alegatos del presunto responsable; que señala en su parte contundente: Dictamen 02.2025 Las medidas de protección me las entregó la Maestra I.C.T.M. el día 10 de abril del 2025. Se adjuntan las capturas de los correos de la cita donde se entregaron dichas protecciones. (Se adjunta captura de pantalla) Pese a ello, se me atribuyó la responsabilidad de dichas filtraciones sin prueba directa, incurriendo*

*en una evidente falta de imparcialidad, contraria al principio de debido proceso consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 2, fracciones II y III del Código de Ética de la UAM, así como los artículos 29 y 30 del Reglamento del Alumnado de esta casa de estudios. Así como el Inciso f de los derechos de las personas señaladas como responsables de una falta.*

*La falta de imparcialidad en una resolución sancionadora vulnera gravemente la legalidad del procedimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de un procedimiento imparcial es parte del debido proceso y que su inobservancia invalida cualquier acto que derive de dicho procedimiento viciado (Tesis Aislada: 1a. CCLX/2013, Registro: 2004831). Además, el Pleno ha establecido que la imparcialidad del órgano resolutor debe manifestarse tanto en la estructura del procedimiento como en la conducta de sus integrantes (Jurisprudencia 1a./J. 9/2015)."*

Se advierte que el recurrente esencialmente argumenta que se le atribuyó la responsabilidad de filtraciones de información del debido proceso, lo cual —a su juicio— vulnera el debido proceso y señala que esto constituye una falta de imparcialidad en la resolución que lo sanciona.

La Comisión revisó la totalidad del Dictamen 02.2025 y corroboró que la resolución que impugna el recurrente identifica tres conductas concretas que F.M.B desplegó en contra de integrantes de la comunidad universitaria, así como sus implicaciones. Dichas conductas se encuentran claramente establecidas en la foja 17 del Dictamen de mérito. En ninguna de ellas se le atribuye al recurrente la filtración de información, ni se utilizan supuestas filtraciones como sustento probatorio para acreditar las faltas.

Por lo anterior, se advierte que el argumento expuesto es infundado, ya que el procedimiento fue conducido por las instancias universitarias con estricto apego a las disposiciones normativas. Tanto la Comisión al emitir su dictamen, como el Consejo Divisional al resolver, analizaron y concatenaron los elementos probatorios disponibles para encuadrar las conductas identificadas en los supuestos normativos establecidos en el artículo 9, fracción IV, del Reglamento del Alumnado:

*Artículo 9. Son faltas, del alumnado y de las personas egresadas, en contra de integrantes de la comunidad universitaria:*

*...IV. Ofender, provocar o molestar con palabras o acciones que atenten contra la dignidad;*

*...*



Lo expresado por el recurrente no logra desvirtuar la legalidad del dictamen recurrido, ya que sustenta sus argumentos en apreciaciones subjetivas carentes de fundamento, que resultan insuficientes para desestimar la resolución que combate.

Señala el recurrente:

**“3. Grabación sin consentimiento en oficina institucional.** Durante una entrega en la oficina de la Dra. [REDACTED] M.G.M.I. el martes 13 de mayo del 2025, fui grabado sin mi consentimiento. Este hecho se hizo evidente cuando el teléfono móvil de su asistente cayó al suelo, dejando expuesta una aplicación de grabación en curso. Tal acción representa una violación directa a mi derecho a la privacidad, protegido por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la protección de datos personales, así como por el artículo 16 del mismo ordenamiento, que consagra la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y prohíbe cualquier intromisión sin orden fundada y motivada. Además, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en sus artículos 3, fracción IX; 18 y 22, establece la necesidad del consentimiento y la obligación de informar al titular cuando se recaben datos personales, como ocurrió en este caso. A nivel institucional, el artículo 2, fracción IV del Código de Ética de la UAM exige salvaguardar la confidencialidad y el respeto a la privacidad en todo tipo de interacción. En el ámbito internacional, el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también protege contra injerencias arbitrarias en la vida privada. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis 1a. CLXXXVIII/2014 (10a.), con registro digital 2007204, que toda grabación no consentida entre particulares vulnera el derecho a la privacidad y, en consecuencia, constituye una prueba ilícita que no puede ser utilizada válidamente en un procedimiento legal o administrativo.

**4.Exposición del caso en espacios académicos sin dictamen.** La Dra. [REDACTED] C.G.S.S. utilizó mi caso como ejemplo en su clase de Bioética antes de que se emitiera resolución alguna, vulnerando con ello el principio de confidencialidad de los procedimientos administrativos, y exponiéndome públicamente sin consentimiento. Esta conducta representa una forma de revictimización y de difamación institucional, contraria al principio de dignidad humana protegido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 11 del Reglamento del Alumnado de la UAM, que establece que ningún miembro de la comunidad podrá ser objeto de tratos denigrantes o discriminatorios. Además, este acto transgrede el artículo 2, fracción IV del Código de Ética de la UAM, que obliga a resguardar la confidencialidad institucional, así como el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada y el honor de las personas. Cabe destacar que la Dra. [REDACTED] C.G.S.S. forma parte del Consejo Divisional de la DCNI, y fue una de las integrantes de la Comisión Dictaminadora que resolvió el procedimiento en mi contra. Su actuación anticipada no solo atentó contra la imparcialidad exigida en el artículo 14 constitucional, sino que también pudo haber influido indebidamente en la deliberación de los otros cuatro firmantes del dictamen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el respeto al debido proceso implica también la garantía de imparcialidad institucional, y que cualquier conflicto de interés debe prevenirse o sancionarse cuando compromete la objetividad de los procedimientos administrativos o académicos (Tesis aislada 2a. CV/2010, registro digital: 160517).



La Comisión identifica que el recurrente refiere esencialmente dos eventos que, según su dicho, constituyeron violaciones a la privacidad y confidencialidad que deben regir el procedimiento reglamentario al que fue sometido. El primero de ellos habría ocurrido durante la etapa de recepción de pruebas y alegatos; el segundo, durante una clase impartida en la Licenciatura en Biología Molecular.

En el primer evento que narra el recurrente, la Comisión revisó que no se presenta ningún elemento de convicción y que su afirmación no aporta los elementos necesarios que permitan a esta Comisión corroborar el evento. Además, no advierte que en su caso dicha corroboración sea útil para desacreditar las conductas por las cuales fue sancionado el recurrente.

Respecto del segundo evento, esta Comisión realizó la verificación correspondiente con la persona titular de la Coordinación de la Licenciatura en Biología Molecular, instancia que informó que el alumno A.E.O.E. manifestó que la profesora señalada no hizo alusión directa del caso ni hizo mención explícita del nombre del alumno F.M.B., por lo que la referencia fue una conjetura hecha por el alumno, la cual fue transmitida, al recurrente.

A efecto de agotar el principio de exhaustividad, la Comisión procedió a la revisión puntual del Dictamen 02.2025 y de la documentación soporte y advirtió que las manifestaciones que realiza el recurrente no cuentan con evidencia ni guardan relación con los hechos materia del citado dictamen; ni le son útiles para desacreditar las conductas por las cuales el recurrente fue sancionado.

La Comisión advierte que los supuestos eventos a los que hacer referencia no fueron utilizados en la resolución que combate el recurrente, ni le depararon perjuicio.

No obstante, están a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía institucional y en la forma que considere pertinente.

Señala el recurrente:

***"5. Trato revictimizante y violencia institucional durante la audiencia.** En la entrevista del 23 de abril de 2025, expuse con claridad los efectos negativos que este proceso ha generado en mi salud mental y situación económica, incluyendo ansiedad, deterioro académico y aislamiento social. Sin embargo, la única respuesta que recibí por parte de la Dra. [REDACTED] M.G.M.I. fue: "¿Y tú qué hubieras hecho diferente?" Esta expresión, lejos de reflejar una actitud de empatía o comprensión institucional, constituye un acto de*

*revictimización, ya que traslada implícitamente la culpa a la persona afectada y trivializa su padecimiento. Esta conducta vulnera mi derecho al trato digno, consagrado en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, contraviene el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la garantía del debido proceso con trato respetuoso a las partes, así como los principios de respeto, empatía y no revictimización contenidos en la Ley General de Víctimas (especialmente los artículos 4, 5 y 7), que obliga a toda institución a abstenerse de reproducir esquemas de violencia institucional. En el ámbito universitario, este hecho quebranta el Artículo 2, fracción V del Código de Ética de la UAM, que exige un ambiente de respeto y responsabilidad en el trato a toda persona, y el Artículo 11 del Reglamento del Alumnado, que reconoce la dignidad como principio rector del actuar institucional. Además, constituye una forma de violencia simbólica institucional, como ha sido definido por la jurisprudencia nacional en materia de protección a la dignidad humana (por ejemplo, Tesis 1a./J. 34/2014 (10a.), Registro digital: 2006427), la cual establece que toda autoridad debe abstenerse de emitir expresiones que menoscaben o humillen la condición de la persona en situación de desventaja y (Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.), Registro digital: 2012363) se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada."*

Se identifica que el recurrente manifiesta que durante su entrevista ante la Comisión de faltas el día 17 de julio de 2025, percibió que una pregunta realizada por la Coordinadora de la comisión fue revictimizante para él.

La Comisión procede a revisar la minuta de la entrevista y advirtió que la Comisión decidió que, como metodología de trabajo para las entrevistas, su coordinadora realizará las preguntas formuladas por sus integrantes, a todas las personas entrevistadas; por lo que el contenido de estas fue acordado previamente y no constituyen una responsabilidad atribuible a la Coordinadora y la pregunta de cierre de la entrevista no fue la mencionada por el recurrente.

En particular la pregunta, que el recurrente califica como revictimizante, se planteó una vez que el recurrente había concluido sus manifestaciones relacionadas con su estado de salud. La Comisión analizó que la pregunta específica no fue utilizada como un elemento de prueba para atribuirle las faltas reglamentarias por las cuales fue sancionado. También es oportuno señalar que el recurrente no tiene la calidad de persona en situación de víctima, por lo que la pregunta no puede resultar revictimizante,



si no existe un procedimiento que le otorgue dicho estatus.

Además, no pasa desapercibido que el Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria, en su artículo 23, fracción I, establece que el estado de salud de las personas es información clasificada como confidencial, por lo que la Comisión resguardó dicha información y al no tener relación con las conductas atribuidas al recurrente, no fue valorada para acreditar o desacreditar las conductas por las que se le sancionó al recurrente.

Aunado a lo anterior, se acredita que durante su entrevista se encontraba presente, de manera remota, personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios, quienes en todo momento velaron por integridad de las personas y del debido proceso.

Por lo anterior, se determina que es infundado el argumento señalado por el recurrente, toda que se acredita que la Comisión de faltas apegó su actuación al procedimiento reglamentario respetando los términos y plazos, en la emisión de su dictamen, que fue aprobado por el Consejo Divisional de la DCNI. Sin que deje de advertirse que en todas sus actuaciones se respetaron todas las oportunidades procesales de defensa del recurrente, referidas a la presentación de pruebas y alegatos en las que se incluyó su oportunidad de ser asesorado por especialistas y su garantía de audiencia ante la Comisión de faltas y dicho órgano colegiado académico.

Señala el recurrente:

*"6. Omisión de medidas de protección Pese a mis denuncias de hostigamiento, amenazas y filtraciones en mi contra, debidamente señaladas durante el proceso, nunca se me otorgaron medidas de protección institucional que salvaguardaran mi integridad, mi derecho al debido proceso o mis condiciones académicas, mientras que las denunciante sí recibieron respaldo inmediato por parte de la administración. Como observación, no existe un órgano que aporte algún tipo de información sobre la defensoría jurídica ni mucho menos proporciona la atención psicológica mencionada en el punto No. 2 de los derechos de las personas señaladas como responsables de una falta, Inciso A, ya que el DDU solo tiene voz mas no voto y no puede intervenir directamente en la Comisión de Faltas lo que me llevo a buscar asesoría con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Hable a la DDU como indicación de la CNDH para buscar asesoría dentro de la universidad, sin embargo, me comentaron que me siguiera asesorando con la CNDH. Mientras que las denunciante recibieron medidas de protección y asesoría de la Unidad para la Prevención y Atención de la Violencia por Razones de Genero (UPAV) así como de la Secretaría de Unidad de la UAM Cuajimalpa. Se observa la imparcialidad de la actuación de la institución*



*en la aplicación de las medidas precautorias que fueron impuestas para los involucrados y solamente tuvieron validez para la parte denunciante. Esta disparidad en el trato constituye una forma de discriminación institucional y configura una vulneración al principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda autoridad tiene la obligación de prevenir y sancionar cualquier acto que implique distinción injustificada por cualquier condición. Asimismo, el artículo 4° constitucional refuerza la igualdad entre personas sin importar su género, condición social o situación particular, garantizando un trato equitativo por parte del Estado y sus instituciones. En el plano normativo universitario, se quebranta lo dispuesto en el Artículo 27 del Reglamento del Alumnado de la UAM, que establece el derecho del alumnado a desarrollarse en un entorno libre de hostigamiento, violencia o discriminación, así como el derecho a contar con protección institucional ante situaciones que amenacen su bienestar. También se vulnera el Artículo 2, fracciones II y V del Código de Ética de la UAM, que obligan a generar un ambiente seguro, empático y no violento en el que se garantice la dignidad y seguridad del estudiantado. En materia internacional, esta omisión institucional viola lo dispuesto en el Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a la igual protección de la ley sin discriminación alguna. Y conforme a la jurisprudencia 1a./J. 161/2019 (10a.), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las omisiones de protección en contextos desiguales, especialmente cuando hay desequilibrio institucional, configuran discriminación estructural si se traducen en una desprotección injustificada de derechos, además ha señalado que la omisión de otorgar medidas de protección adecuadas en casos de violencia o acoso institucional constituye una forma de responsabilidad por inacción, como se desprende de la tesis aislada 1a. CCVIII/2011, Registro digital: 160599, que establece que la autoridad tiene el deber reforzado de protección cuando tiene conocimiento de una situación de riesgo.*

Se advierte que el recurrente manifiesta que existió un desequilibrio durante el procedimiento toda vez que la Institución no emitió medidas de protección a su favor.

La Comisión procede a revisar la totalidad de las actuaciones y de los insumos del Dictamen 02.2025 y advierte que no existe evidencia de que el recurrente haya realizado una solicitud explícita de medidas de protección, en contraposición a esto, si existe evidencia de las solicitudes realizadas por las alumnas en situación de víctima ante la Secretaría de Unidad.

Esto es así ya que la Universidad, como sujeto de derecho público, se rige por el principio de facultades expresas, según el cual sus órganos y las instancias de apoyo sólo pueden realizar aquello que expresamente les permite la norma; lo cual implica la imposibilidad de actuar en materias que le son conferidas a otros órganos e instancias. Asimismo, con

base en el artículo 2 del Reglamento Orgánico, la Institución se organiza en un régimen de desconcentración funcional y administrativa, según los cuales el cumplimiento del objeto de la Universidad debe ser distribuido entre los distintos órganos e instancias de la misma, y que en el ejercicio de sus competencias no están subordinados a otro órgano superior y gozan de autonomía técnica para ejercerlas.

En este sentido, conforme lo establecido en el artículo 81, fracción IX del Reglamento Orgánico, corresponde a esa instancia de apoyo, la Secretaría de Unidad, establecer de inmediato, las medidas de protección necesarias que se soliciten para salvaguardar, en los espacios en donde se desarrollen actividades universitarias, la integridad o dignidad de las personas de la comunidad universitaria por encontrarse en una situación de violencia. Estas medidas administrativas se ordenarán previa evaluación del riesgo y de acuerdo con las posibilidades institucionales.

Por lo anterior, es infundado el argumento que realiza el recurrente y no es útil para desvirtuar las conductas que fueron identificadas y sancionadas por resolución del Consejo Divisional.

Señala el recurrente:

**7 Inconsistencias en la valoración de testimonios y contradicciones en las declaraciones**

*Cabe destacar que en el dictamen, en el numeral XI, puntos 6 y 7, se indica que los doctores J.A.F.F. y M.O. fueron entrevistados el 4 de junio de 2025. Sin embargo, sus testimonios, que desmintieron categóricamente las acusaciones, fueron ignorados por la Comisión. "Al docente J.A.F.F. en la UEA de Modelos I y II, le faltó el respeto diciéndole "esta clase y las matemáticas discretas no sirven para nada ni deberíamos entrar" y se rio..."*

*\*Valoración de pruebas, 1.- Acta Circunstancial de hecho de la Queja de Violencia por razones de Género Número Seis, de la alumna N.G.V.M., Dictamen 02.2025 "Me parece incorrecto e indignante que le faltare al respeto a los profesores, concretamente al doctor J.A.F.F. al decir que su clase es una tontería y que no servía para nada, solo noté como incomodaba al profesor y se sentía humillado; este comportamiento lo repitió con la doctora M.O. en su UEA de Combinatoria diciendo "yo no voy a entrar a perder mi tiempo en esa clase que no sirve para nada"..."*

*\*Valoración de pruebas, 1.- Acta Circunstancial de hecho de la Queja de Violencia por razones de género Número Siete, de la alumna N.A.P.C., Dictamen 02.2025 "Un profesor señaló que es muy cercano al alumno involucrado porque está dirigiendo su proyecto terminal..." "Otra profesora señaló que no conoce muy bien al alumno involucrado, que participó en actividades académicas y que no lo conoce fuera del ambiente de clases, que le parece un alumno muy extrovertido..."*

*\*15. Entrevistas con el profesorado, Dictamen 02.2025 Tanto N.G.V.M. como N.A.P.C. junto con algunos de sus testigos, afirmaron en sus testimonios que yo tenía comportamientos humillantes hacia los doctores J.A.F.F. y M.O.. Sin embargo tales afirmaciones fueron completamente desmentidas. A pesar de esta evidencia directa y clara, la Comisión optó*



*por ignorarla. El dictamen reconoce haber recibido 26 testimonios presentados por mi parte (punto XI.2), pero no se ofrece justificación alguna respecto a por qué fueron desestimados. Lo único que mencionan es: "La Comisión resolvió entrevistar personalmente solo a los integrantes del alumnado que refirieron en sus testimonios escritos haber presenciado los eventos de materia de las conductas identificadas por la Comisión, como posiblemente constitutivas de una falta reglamentaria" \*16..Entrevistas con el alumnado testigos directos de los hechos analizados, Dictamen 02.2025 Sin embargo, dicha determinación no fue respetada, ya que únicamente se citó a testigos cercanos a las denunciantes, lo cual evidencia una falta de imparcialidad. De los testigos que propuse, solo fue citado M.E.N.S., y dicha entrevista obedeció a un motivo distinto al señalado. Esta omisión refleja una carencia de motivación en el actuar de la Comisión, vulnerando con ello el principio de exhaustividad y objetividad que debe regir a toda autoridad universitaria. Se identifican inconsistencias graves en las declaraciones de las alumnas denunciantes y en la valoración que la Comisión hizo de los testimonios. En primer lugar, la alumna N.G.V.M. admitió tener conocimiento previo de los mensajes injuriosos emitidos por la alumna J.Y.L.A., los cuales me involucraban directamente. No obstante, intentó minimizar su relevancia argumentando que en ese momento no existían medidas de protección vigentes. Esta afirmación es falsa, ya que la Maestra I.C.T.M. me había otorgado dichas medidas un día antes de la fecha en que se enviaron los mensajes. Es particularmente preocupante que los testimonios presentados en el dictamen provengan exclusivamente de testigos presentados por N.G.V.M. y N.A.P.C., lo que evidencia una clara parcialidad, ya que no se consideraron los 26 testimonios que yo aporté, entre los cuales se encuentran profesores con posiciones totalmente imparciales. Esta omisión refleja un sesgo inadmisibles en la valoración de la prueba.*

La Comisión procede a revisar la totalidad de las actuaciones y de los insumos del Dictamen 02.2025 y advierte que toda la documentación a la que hace referencia fue conocida y valorada asumiendo que fue suscrita por las personas señaladas, sin embargo, en el análisis se advirtió que su contenido no guardaba relación directa con las tres conductas constitutivas de faltas reglamentarias que fueron acreditadas al recurrente. Es decir, los 26 testimonios a los que refiere son, en realidad cartas firmadas que se desahogan por su propia naturaleza y no requieren de entrevistas o ratificaciones posteriores.

En razón a lo anterior, en el análisis de la Comisión, en su contenido sí fueron valoradas, no obstante, al no estar vinculadas directamente con los hechos que se le atribuyeron al recurrente, si no sólo con referencias genéricas sobre su la personalidad y su relación con terceras personas, su alcance probatorio **se estimó irrelevante** para el análisis del caso concreto.

Así, la Comisión procedió a identificar puntualmente cuáles testimoniales hacían referencia explícita a los eventos en los que sucedieron las conductas acreditadas al recurrente, y de este análisis resolvió solicitar la entrevista presencial sólo con las personas que manifestaron en su escrito, haber sido testigos presenciales de las

siguientes conductas:

- El 30 de septiembre de 2024, durante la clase de la UEA Optimización II, el alumno F.M.B. realizó, sin que fuera percibido por el profesor, con sus manos una seña de contenido sexual dirigido a una compañera que se encontraba exponiendo y que aunque la compañera prosiguió su exposición, el resto del alumnado que se percató de dicha seña se sintió incómodo.
- El 8 de marzo de 2025, en el grupo de WhatsApp al que pertenece todo el alumnado involucrado, F.M.B. publicó un sticker de una figura masculina golpeando a una figura femenina, que él mismo elaboró con una plantilla, al cual le añadió las palabras "Cállate N. [REDACTED]", justo después de un comentario académico que realizó la alumna N.G.V.M. La publicación obtuvo alrededor de 20 reacciones de "Me divierte".
- Durante clases, en los trimestres 24-O y 25-I, el alumno F.M.B. ha realizado comentarios racistas, sexistas y discriminatorios, al interior del salón de clases y en voz alta. Si bien, los realizó con sus amigos más cercanos, fueron percibidos por varios integrantes del alumnado que se sintieron molestos e incómodos, sobre todo por que el contenido sexista de sus comentarios en grupos donde la mayoría son hombres.

La determinación de la Comisión se encuentra visible a foja 16 del Dictamen 02.2025 donde puntualmente se refiere que resolvió entrevistar personalmente solo a los integrantes del alumnado que refirieron haber presenciado los eventos materia de las conductas identificadas como posiblemente constitutivas de una falta reglamentaria.

Con la finalidad de atender el principio de exhaustividad se adjunta al presente dictamen **el Anexo R.1** que contiene el listado que elaboró la Comisión con base en los testimonios escritos de las personas que manifestaron haber presenciado directamente las conductas del recurrente que acreditadas como faltas reglamentarias. Dicho listado fue utilizado para identificar a las personas que la Comisión resolvió entrevistar.

Señala el recurrente:

*"El día 16 de mayo de 2025 fui informado vía correo electrónico por la Oficina Técnica del Consejo Divisional de la DCNI que el plazo para que las personas que me señalan en el caso de faltas presentaran pruebas o alegatos adicionales había vencido el 12 de mayo del mismo año. No obstante, en el dictamen final aparecen dos testimonios adicionales, los de la alumna L.A.S.S. y el alumno P.A.Z.P., de los cuales no fui notificado oportunamente ni tuve conocimiento previo. Esta incorporación posterior de elementos probatorios vulnera mi derecho de defensa y contradice el principio de igualdad procesal, al haber sido incluidos sin que se me brindara la oportunidad de conocerlos, analizarlos o refutarlos dentro del plazo establecido.*





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
Unidad Cuajimalpa



Dos décadas construyendo futuros en el poniente

La Comisión procede a revisar la totalidad de las actuaciones y de los insumos del Dictamen 02.2025 y advierte las documentales a que hace referencia fueron entregadas en el desahogo de la vista que se le mandó dar a las personas en situación de víctima. Y que de su contenido no se aportan, ni se retomaron más elementos a los que ya había analizado la Comisión por lo que no le depara perjuicio la integración de dichas testimoniales al Dictamen 02.2025.

Por lo anterior, es infundado el argumento que realiza el recurrente y no es útil para desvirtuar las conductas que fueron identificadas y sancionadas por resolución del Consejo Divisional.

Señala el recurrente:

*El día 20 de junio de 2025 envié un correo electrónico a la Oficina de Secretaría de la DCNI para manifestar formalmente mi preocupación ante comentarios que, según me fue informado por diversas personas, la Dra. [REDACTED] C.G.S.S realizó en su clase de Bioética, haciendo alusión directa al caso en el que me encuentro involucrado. Considero que dichas referencias son inapropiadas y contrarias a los principios de confidencialidad y respeto que deben regir en todo proceso académico y administrativo, máxime tratándose de una integrante del propio Consejo Divisional. Esta situación pone en entredicho la imparcialidad del proceso y genera un ambiente adverso y de hostigamiento académico.*

*Cabe señalar que dicho correo **nunca fue respondido**, lo cual constituye una omisión por parte de la autoridad y refuerza la percepción de falta de atención, parcialidad y falta de diligencia en el manejo del caso. Esta falta de respuesta vulnera mi derecho a ser escuchado y atendido en un entorno académico que se presume justo y equitativo.*

Se identifica que el recurrente manifiesta esencialmente un evento que, según su dicho, aconteció durante el trámite de la secuela procesal y conforme a sus argumentos los hechos reportados constituyeron una violación al debido proceso con que debe conducirse el procedimiento reglamentario al que fue sometido.

La Comisión verificó que el correo señalado fue enviado con posterioridad a la emisión, votación y firma del Dictamen 02.2025 por parte de esta instancia. Asimismo, se constató que el alumno fue convocado a la sesión del Consejo Divisional en la que dicho órgano colegiado conoció el dictamen, garantizándose su derecho de audiencia. Durante dicha sesión, F.M.B. expuso de manera directa los hechos que ahora refiere, por lo que la Comisión no advierte afectación a sus derechos.



División de Ciencias  
Naturales e Ingeniería

Unidad Cuajimalpa  
DCNI | División de Ciencias Naturales e Ingeniería  
Consejo Divisional

Adicionalmente, el correo no fue dirigido a órgano o instancia con atribuciones resolutorias respecto a lo planteado en el mensaje, por lo que no puede considerarse como una gestión formal dentro del procedimiento.

Finalmente, la Comisión procede a la revisión exhaustiva del Dictamen 02.2025 y de la documentación soporte y advierte que las manifestaciones que realiza el recurrente no guardan relación con los hechos materia del citado dictamen; ni son útiles para desacreditar las conductas por las cuales el recurrente fue sancionado.

No obstante, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía institucional y en la forma que considere pertinente.

Señala el recurrente:

*"Durante su entrevista (numeral XI.7 del dictamen), el profesor E.M.O. señaló que no recordaba con claridad lo ocurrido en clase, ya que se ubicaba en la parte trasera del salón. No obstante, cuento con una fotografía que demuestra con claridad que el profesor E.M.O. se encontraba en las primeras filas, muy cerca del lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos. Esta imagen no sólo contradice su declaración, sino que evidencia que el proceso no consideró ni contrastó elementos objetivos que hubieran sido esenciales para esclarecer los hechos. La falta de valoración de esta prueba refuerza el carácter parcial y superficial de la investigación llevada a cabo por la Comisión. Finalmente, aunque fue demostrada la falsedad de varios dichos por los propios testigos y se reconoció la existencia de mensajes donde se me injuriaba directamente, el Consejo optó por otorgar credibilidad absoluta a las denunciantes sin contar con una sola prueba directa de las faltas que se me imputan. Esta decisión no sólo contraviene el principio de presunción de inocencia, sino que constituye una falta de motivación y fundamentación jurídica en la resolución.*

El recurrente manifiesta esencialmente que la testimonial de un profesor es contraria a la verdad, alega una incorrecta valoración de la misma, a su modo de ver, y presenta dos capturas de pantalla de una publicación en redes sociales. Señala que las fotografías corresponden al día 30 de septiembre de 2024 y que dichas fotografías presuntamente acreditan que el profesor se encontraba al lado de F.M.B y que habría percibido si hubiera realizado la seña obscena.

La Comisión procede a la revisión exhaustiva del Dictamen 02.2025 y de la documentación soporte y advierte que las manifestaciones del recurrente son apreciaciones subjetivas del trabajo de la Comisión, toda vez que la testimonial del profesor que impartió la clase del 30 de septiembre de 2024, visible a foja 16 del



mencionado dictamen, refirió que no percibió la seña obscena, sin embargo que la alumna **sí** lo buscó, posterior a la clase, y le comentó que ella había percibido la señal obscena, lo que da consistencia al resto de las testimoniales.

La Comisión procedió a valorar las capturas de pantalla que ofrece el recurrente, y advirtió que tienen fecha de publicación de 10 de octubre de 2024 y que su alcance probatorio es irrelevante pues solo acreditan momentáneamente el lugar que ocupaban las personas en un lugar determinado, por lo que no es una prueba útil para desacreditar las conductas que se le atribuyeron a F.M.B.

Por lo anterior, es infundado el argumento que realiza el recurrente y no es útil para desvirtuar las conductas que fueron identificadas y sancionadas por resolución del Consejo Divisional.

Señala el recurrente:

***“8. Valoraciones arbitrarias por parte de la UPAV: estigmatización y violación al derecho a la salud mental. Es profundamente preocupante que la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia (UPAV) de la Universidad Autónoma Metropolitana emita diagnósticos o valoraciones sobre la estabilidad mental de los estudiantes sin sustento clínico ni la realización de estudios psiquiátricos o neurológicos formales. Esta práctica no solo excede sus atribuciones institucionales, sino que vulnera gravemente los derechos fundamentales del alumnado. Emitir juicios sobre la salud mental sin evaluación por profesionales acreditados, ni consentimiento informado, contraviene el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe toda forma de discriminación y obliga a todas las autoridades, incluidas las universitarias, a respetar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, quebranta el Artículo 4° constitucional, que establece el derecho a la protección de la salud, así como el Artículo 6°, fracción I de la Ley General de Salud, que mandata que los servicios de atención a la salud mental deben ser proporcionados con base en criterios científicos y éticos, respetando la dignidad de las personas.***

*Esta actuación institucional también infringe el Artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege contra injerencias arbitrarias en la vida privada, y el Artículo 5.1, que señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente la Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.), Registro digital: 2012363, establece que toda autoridad, incluidas instituciones educativas, está obligada a respetar y proteger la dignidad humana, lo que implica abstenerse de emitir expresiones o valoraciones que degraden, estigmaticen o descalifiquen sin justificación objetiva y racional.*

*Finalmente, el Artículo 2, fracción V del Código de Ética de la UAM obliga a garantizar el respeto, la empatía y la responsabilidad en la interacción con toda persona, especialmente*

*en contextos de vulnerabilidad, como lo son los procedimientos de atención a la violencia. El Artículo 11 del Reglamento del Alumnado reafirma este principio, prohibiendo prácticas institucionales que atenten contra la dignidad del estudiante.*

*Cabe destacar que, a diferencia de los diagnósticos especulativos emitidos por la UPAV sin estudios clínicos formales, yo cuento con diagnóstico médico oficial de trastorno de ansiedad generalizada, expedido por el Hospital ABC Santa Fe, en donde he recibido atención médica. Como parte de mi tratamiento, tengo prescritos dos medicamentos ansiolíticos de uso diario: Alprazolam 0.25 mg y Paroxetina 20 mg, además de Metoprolol y Clortalidona 50 mg, indicados para el control de la presión arterial alta, derivada directamente de la ansiedad crónica. Estas prescripciones, debidamente documentadas mediante recetas médicas oficiales que adjunté en mi defensa, no fueron tomadas en cuenta por la Comisión.*

*La omisión de estos documentos clínicos, aun cuando fueron ofrecidos como prueba, agrava la estigmatización sufrida por parte de la UPAV y revela una clara falta de seriedad en el tratamiento institucional del tema de salud mental. No sólo se desestimó evidencia médica con validez legal y científica, sino que se optó por imponer una narrativa no especializada que me perjudica en múltiples dimensiones. Estas prácticas arbitrarias y estigmatizantes por parte de la UPAV no solo carecen de validez legal, sino que constituyen una forma de violencia institucional que debe cesar de inmediato, siendo objeto de revisión y sanción por las instancias universitarias correspondientes.*

Se advierte que el recurrente esencialmente argumenta que existieron valoraciones o diagnósticos sobre la estabilidad mental de los alumnos sin sustento clínico que, a su modo de ver, excede sus atribuciones institucionales y vulnera los derechos fundamentales del alumnado.

Se reitera que el Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria, en su artículo 23, fracción I, establece que el estado de salud de las personas es información clasificada como confidencial, por lo que la Comisión resguardó dicha información y al no tener relación con las conductas atribuidas al recurrente, no fue valorada para acreditar o desacreditar las conductas por las que se le sancionó al recurrente.

Por lo anterior, es infundado el argumento que realiza el recurrente y no es útil para desvirtuar las conductas que fueron identificadas y sancionadas por resolución del Consejo Divisional.

Señala el recurrente:

#### **9. Uso ideológico y descontextualizado de la perspectiva de género para**



**justificar una narrativa condenatoria** En el apartado titulado “La perspectiva de género”, la Comisión sostiene que: “La Comisión identificó que las conductas que se acreditan al alumno fomentan la reproducción de estereotipos y prejuicios de género que refuerzan la construcción social de la dominación masculina. Que el alumno encuentra apoyo en sus pares masculinos, mediante risas y comentarios sexistas en un entorno académico que se caracteriza por tener poca presencia de mujeres.” Tal afirmación resulta profundamente sesgada y carente de sustento probatorio. Dentro del expediente constan múltiples testimonios de alumnas y profesoras que participaron como testigos en mi defensa, quienes relatan una relación respetuosa, colaborativa y libre de actos sexistas. Además, he sostenido una participación activa en eventos académicos como congresos, conferencias y seminarios, donde he compartido espacios con profesoras de la División, no solo como oyente sino como interlocutor, y donde he recibido retroalimentación positiva por mi desempeño académico. A esto se suma que mi servicio social se encuentra actualmente bajo la supervisión directa de dos profesoras, con quienes mantengo una relación académica constante, profesional y libre de conflicto. La Comisión, sin embargo, ignora deliberadamente estas relaciones, seleccionando únicamente aquellos elementos que refuerzan una narrativa preconcebida. Esta omisión distorsiona la realidad y desvirtúa el uso legítimo de la perspectiva de género, que debe servir como una herramienta de análisis estructural y no como fundamento automático de culpabilidad. El uso ideológico y descontextualizado de esta perspectiva en el dictamen compromete los principios de imparcialidad, verdad procesal y motivación objetiva que deben regir en toda resolución sancionadora dentro de un Estado de Derecho que vulnera diversos principios y derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales y normativas universitarias. En primer lugar, infringe el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incurrir en una forma de discriminación institucional que estigmatiza sin base objetiva, ignorando el principio de dignidad humana y la obligación de garantizar los derechos bajo criterios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, viola los Artículos 14 y 16 constitucionales, al emitir un juicio sin motivación adecuada ni valoración completa de las pruebas, lo cual atenta contra el debido proceso y la exigencia de fundamentación jurídica en actos de autoridad. Se infringe también el Artículo 20, apartado B, fracción I, al invertirse de facto la carga de la prueba y desestimarse la presunción de inocencia.

A nivel internacional, la afirmación es contraria a lo dispuesto en los Artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el derecho a un procedimiento imparcial, así como al Artículo 11, que protege la honra y la vida privada contra injerencias arbitrarias. También se vulnera el Artículo 24 del mismo tratado, al establecer un trato desigual y estigmatizante basado en una lectura parcial del contexto de género. En el ámbito institucional, dicha afirmación contraviene el Artículo 27 del Reglamento del Alumnado de la UAM, que garantiza un trato digno, respetuoso e igualitario, libre de discriminación o violencia simbólica; el Artículo 29, que reconoce el derecho del alumnado a presentar pruebas y a que estas sean valoradas imparcialmente; el Artículo 30, que exige objetividad en el actuar de las autoridades universitarias; y el Artículo 31, que obliga a garantizar un procedimiento justo. Finalmente, vulnera también los principios rectores establecidos en el Código de Ética de la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente en sus fracciones II, III y V del Artículo 2, que ordenan actuar con

*imparcialidad, valorar con objetividad, respetar la dignidad humana y evitar cualquier forma de estigmatización.*

El recurrente argumenta esencialmente que el análisis con perspectiva de género de la Comisión está sesgado y carece de sustento probatorio toda vez que se incorporaron evidencias de personas de la comunidad que relatan que el recurrente sostiene con determinadas personas una relación respetuosa, colaborativa y libre de actos sexistas. Señala que la Comisión hizo un uso ideológico y descontextualizado de la perspectiva de género.

Lo anterior no es útil para su defensa, toda vez que no se desacredita sus propias conductas desplegadas en momentos que fueron bien identificados por la Comisión de faltas y presenciados por otros integrantes del alumnado.

Como se acredita fehacientemente esta Comisión de faltas, fundó y motivó su determinación, esto es, expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso e indicó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del Dictamen.

Es decir, se desprende que la Comisión de faltas, en su Dictamen, y el órgano colegiado, en su resolución, realizaron su análisis con estricto apego a las disposiciones normativas sin que el hoy recurrente quedara en estado de indefensión, pues contrario a lo que pretende hacer valer, las conductas que se sancionan fueron plenamente identificadas por el órgano colegiado.

De lo expresado en su argumento el recurrente no logra desvirtuar la legalidad del dictamen recurrido, pues basa sus argumentos en determinaciones subjetivas que no tienen fundamento para desestimar la resolución que combate.

## **II.2 APARTADO AGRAVIOS**

El recurrente establece lo siguiente:

*La sanción de suspensión impuesta por dos trimestres académicos, contenida en el dictamen emitido el 1 de febrero de 2025 por la Comisión de Faltas de la DCNI, genera una serie de perjuicios graves, directos e irreparables en mi contra, tanto en el ámbito académico como en mi desarrollo personal y profesional, vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Constitución y la normativa universitaria. En primer lugar, dicha sanción interrumpe arbitrariamente mi proceso de titulación. Cabe señalar que al momento de la*



emisión del dictamen sólo me restaba cursar una materia, la cual estoy actualmente acreditando, para concluir en su totalidad el plan de estudios correspondiente. Asimismo, ya he cumplido con todos los demás requisitos institucionales: servicio social liberado, movilidad académica completada y acreditación del idioma inglés. La suspensión, por tanto, retrasa injustificadamente mi egreso y obstaculiza mi derecho a obtener el título profesional en tiempo y forma. Este retraso tiene consecuencias económicas y personales significativas. La imposibilidad de contar con el título limita de forma inmediata mi acceso al mercado laboral formal y reduce drásticamente mis oportunidades de inserción profesional, lo cual afecta directamente mi situación financiera. Esta afectación no sólo repercute en mi proyecto de vida, sino que compromete planes ya establecidos, como la boda que tengo programada para abril de 2026, cuya viabilidad depende en buena medida de mi estabilidad laboral. Además del perjuicio económico y académico, la suspensión implica un agravio moral y reputacional. La resolución se dictó con base en un procedimiento viciado, sin haberse valorado de forma imparcial los más de 26 testimonios y 60 páginas de alegatos presentados por mi defensa, lo que contraviene flagrantemente los principios de debido proceso, legalidad y presunción de inocencia. Esta omisión no sólo me coloca en una posición de desventaja institucional, sino que perpetúa una narrativa incompleta y parcial que daña injustamente mi buen nombre dentro de la comunidad universitaria.

El dictamen afirma que: "...Las conductas del alumno contribuyen a crear un ambiente académico hostil para las mujeres dificultando su participación y permanencia en el espacio académico, especialmente en disciplinas como ciencias, matemáticas e ingenierías." \*Criterio de La perspectiva de género., Dictamen 02.2025 Cabe destacar que durante mi trayectoria como alumno de la UAM, he sido incluso imagen institucional de esta casa de estudios. Mi fotografía aparece en la portada oficial del programa de Matemáticas Aplicadas en el sitio web de la Unidad Cuajimalpa, como parte de las campañas institucionales de difusión. Este reconocimiento público por parte de la universidad es prueba de mi compromiso académico y de la imagen positiva que hasta antes de este proceso mantenía dentro de la comunidad. La resolución sancionadora no solo ignora este historial, sino que atenta contra mi honor y reputación construidos durante años de esfuerzo, sin considerar el daño moral que dicha decisión implica.

**(Se adjunta imagen)**

Asimismo, participé activamente en el podcast institucional "De Vocación a Futuro: Licenciatura en Matemáticas Aplicadas en UAM Cuajimalpa", el cual fue publicado en el canal oficial de YouTube de la universidad. En dicho episodio —que sigue disponible públicamente— fui invitado como representante estudiantil y estuve encargado de convocar a otros compañeros, responsabilidad que me fue asignada directamente por el Dr. J.A.F.F. Esta participación no solo demuestra mi compromiso con la vida universitaria, sino que evidencia el nivel de confianza que docentes de alto perfil depositaron en mí. **(Se adjunta imagen)**

Adicionalmente, colaboré en dos videos promocionales publicados en las redes sociales oficiales de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas. En uno de ellos, grabado junto con la Dra. M.O., explicamos la relación entre el juego de mesa SET y conceptos matemáticos. En el otro, compartí mi experiencia personal dentro de la carrera. Ambos materiales siguen disponibles públicamente en el perfil oficial de Instagram de la licenciatura (@matematicasaplicadasuamc). **(Se adjunta imagen)**

<https://www.instagram.com/matematicasaplicadasuamc/reel/DHhNp-Gv0xd/>

**(Se adjunta imagen)**



<https://www.instagram.com/matematicasaplicadasuamc/reel/DH9TlaAIYzM/>

*Todas estas colaboraciones institucionales, que implican selección y confianza por parte de profesorado y autoridades, contrastan radicalmente con la imagen sancionadora presentada por la Comisión. La omisión de estos elementos en la valoración del caso constituye una falta de contextualización que redundará en un juicio injusto y carente de sustento equilibrado.”*

El recurrente realiza, en este apartado, manifestaciones relacionadas con las implicaciones personales que percibiría en caso de que se confirme la sanción impuesta. Asimismo, incorpora capturas de pantalla de actividades académicas en las que ha participado para promover la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, argumenta que sus participaciones académicas dan cuenta de la confianza del profesorado y autoridades en su imagen escolar.

La Comisión procede a la revisión exhaustiva del Dictamen 02.2025 y de la documentación soporte y advierte que las capturas de pantalla que incorpora F.M.B., en su recurso de reconsideración, y el argumento de sus contribuciones académicas a la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, no son útiles para su defensa, toda vez que no se desacreditan las conductas que desplegó en contra de otros integrantes de la comunidad universitaria, bajo las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar:

- El 30 de septiembre de 2024, durante la clase de la UEA Optimización II, el alumno F.M.B. realizó, sin que fuera percibido por el profesor, con sus manos una seña de contenido sexual dirigido a una compañera que se encontraba exponiendo y que aunque la compañera prosiguió su exposición, el resto del alumnado que se percató de dicha seña se sintió incómodo.
- El 8 de marzo de 2025, en el grupo de WhatsApp al que pertenece todo el alumnado involucrado, F.M.B. publicó un sticker de una figura masculina golpeando a una figura femenina, que él mismo elaboró con una plantilla, al cual le añadió las palabras “Cállate N. [REDACTED]”, justo después de un comentario académico que realizó la alumna N.G.V.M. La publicación obtuvo alrededor de 20 reacciones de “Me divierte”.
- Durante clases, en los trimestres 24-O y 25-I, el alumno F.M.B. ha realizado comentarios racistas, sexistas y discriminatorios, al interior del salón de clases y en voz alta. Si bien, los realizó con sus amigos más cercanos, fueron percibidos por varios integrantes del alumnado que se sintieron molestos e incómodos, sobre todo por que el contenido sexista de sus comentarios en grupos donde la mayoría son hombres.

Como se acredita fehacientemente la Comisión fundó y motivó su determinación, esto



es, expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso e indicó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del Dictamen. Es decir, se desprende que la Comisión realizó el análisis con estricto apego a las disposiciones normativas sin que el hoy recurrente quedara en estado de indefensión, pues contrario a lo que pretende hacer valer, las conductas que se sancionan fueron plenamente identificadas por la Comisión de faltas y resueltas por el órgano colegiado.

De lo expresado en su argumento la recurrente no logra desvirtuar la legalidad del dictamen recurrido, pues basa sus argumentos en determinaciones subjetivas que no tienen fundamento para desestimar la resolución que combate.

### **III. VALORACIÓN DE PRUEBAS**

#### **III.1 Entrevista con el alumno F.M.B.**

Con la finalidad de otorgar una escucha plena a la presente etapa procesal la Comisión determinó entrevistar, de manera presencial al recurrente, en la Sala del Consejo Divisional, en presencia del Defensor Adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Dicha entrevista se realizó el día 17 de julio de 2025, en la misma, el recurrente reiteró el contenido de su recurso y realizó manifestaciones subjetivas y dudas puntuales sobre el trámite del presente asunto, sin aportar mayores elementos a los que ya había aportado en su escrito.

#### **III.2 Pruebas documentales ofrecidas por el recurrente**

La Comisión, siguiendo el orden establecido en el recurso de reconsideración, procedió a desahogar las pruebas ofrecidas:

##### **III.2.1 Anexo 1. Cartas testimoniales recientes presentadas en apoyo a este recurso de reconsideración.**

- Un escrito firmado por la alumna K.N.P.E. [REDACTED]

[REDACTED].

- Un escrito sin rúbrica por M.E.N.S. [REDACTED].
- Un escrito sin rúbrica de A.Y.R.P. [REDACTED].
- Escrito firmado por A.R.V. [REDACTED].
- Escrito firmado por A.E.O.E. [REDACTED].

De la valoración de las cartas que se aportaron, la Comisión analizó el escrito de A.Y.R.P. [REDACTED] y conoció que ella manifestó que "En ningún momento F.M.B. [REDACTED] ofendió o hizo gestos ofensivos hacia nuestra compañera K.N.P.E. [REDACTED] y consideró indispensable entrevistar personalmente a K.N.P.E. toda vez que se identificó que su testimonio podía brindar más elementos en el análisis de una de las conductas que se acreditaron como faltas al recurrente. La entrevista se realizó de manera remota el día 17 de julio de 2025.

Al otorgarle el uso de la palabra la alumna K.N.P.E. se limitó a señalar que no tenía más que agregar al contenido de su escrito. Por lo que la Comisión procedió a valorar su testimonio con el contenido de su escrito, en el sentido de que niega que ella haya percibido señas obscenas dirigidas hacia su persona. "En específico, niego que se hayan producido señas obscenas hacia mi persona, ni dentro ni fuera de contextos académicos."

Sin embargo, las testimoniales señaladas concatenadas con todos los elementos de análisis en el presente recurso, en nada le favorecen al recurrente para desvirtuar sus conductas, toda vez que la Comisión analizó que una de las personas que aportaron su testimonial era la única persona que se encontraba conectada en línea en la clase del 30 de septiembre de 2024 y que adicionalmente se encontraba exponiendo, por lo que se presume que su visión periférica se encontraba limitada y que el testimonio de las personas que se encontraban de manera presencial en el momento de la clase presenta un mayor valor probatorio.

Respecto a las testimoniales anteriores la Comisión consideró que se limitan a desacreditar el dicho de los testigos que presenciaron la conducta de la seña obscena, sin embargo, no precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan desvirtuar las conductas que se le atribuyen a F.M.B toda vez que no abundan en aportar, además, dato alguno del porqué los demás testigos pudieran mentir o tener razones para inculpar equivocada o indebidamente al recurrente.



Este argumento tiene apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia:

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LAS IMPUTACIONES DE CARGO PREVALECEAN SOBRE LAS DE DESCARGO -CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE LAS EMITAN Y DE QUE CONTRADIGAN LA IMPUTACIÓN HACIA EL INCUPLADO-, SI ÉSTAS NO JUSTIFICAN LA POSIBLE ANIMADVERSIÓN O MOTIVO POR EL CUAL LOS TESTIGOS DE CARGO HABRÍAN DE SEÑALAR A UNA PERSONA DISTINTA DEL VERDADERO CULPABLE O AUTOR DEL HECHO IMPUTADO, SOBRE TODO SI LA VERSIÓN DE LAS VÍCTIMAS SE CORROBORA CON EL RESTO DE LAS PRUEBAS.

La cantidad de testigos, por sí, no determina la mayor veracidad de sus testimonios, en función del elevado número de personas que declaren, pues el hecho de que se presenten a declarar varios testigos que afirman un hecho de forma idéntica no implica, necesariamente, que los eventos hayan acontecido de la manera en que lo refieren, sobre todo cuando confrontando esas versiones con las imputaciones de cargo y otros indicios, no logran desvirtuar a estas últimas, pues es válido comprender que la aparición posterior de una versión contraria a la de los declarantes de cargo (que incluso fueron víctimas), lleva implícita también la afirmación de los deponentes, en el sentido de que las víctimas que imputan el hecho mienten o no dicen la verdad y, ello, a su vez, implicaría admitir la pretensión dañada de perjudicar deliberadamente al inculcado; por tanto, quien pretende controvertir en esas condiciones a las imputaciones de cargo, deberá no sólo limitarse a sostener una versión opuesta (con las citadas derivaciones implícitas), sino justificar, además, la posible animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo habrían de señalar a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado; no obstante, si sólo se allegan testimonios de descargo (independientemente de su número) que se limitan a contradecir la imputación, pero sin aportar, además, dato alguno del porqué los imputadores pudieran mentir o tener razones para inculpar equivocada o indebidamente al enjuiciado, es claro que de la ponderación y confronta de ambos tipos de narrativa, deben prevalecer aquellos que provienen de las víctimas, sobre todo cuando la versión de éstas se corrobora con el resto de las pruebas, tales como periciales, documentales, huellas materiales, vestigios o, en general, todo aquello que siendo legalmente incorporado a los autos converja en prueba indiciaria o circunstancial que así lo establezca.

En el presente análisis, no pasa desapercibido para la Comisión que, aunque en la descripción de circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento del 30 de septiembre

de 2024, se manifestó en múltiples ocasiones que la alumna K.N.P.E. se encontraba exponiendo de manera remota, la Comisión al identificar la falta, no la señaló como la receptora/víctima de la seña obscena realizada por el recurrente, sino que analizó que fueron varias personas presentes en la clase las que sí percibieron la seña obscena, y fueron los que se sintieron molestados, en términos del artículo 9, fracción IV del RA.

Sobre el testimonial de A.E.O.E. La Comisión considera que ha quedado aclarado lo manifestado con base en la respuesta emitida al punto 4. *Exposición del caso en espacios académicos sin dictamen*, incluida en la Sección II.1 foja 13 de este dictamen referente a la verificación realizada con la persona titular de la Coordinación de Estudios de la Licenciatura en Biología Molecular.

Respecto a las cartas de M.E.N.S. y A.R.V., esos documentos presentados por el recurrente, en la calidad de pruebas se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin embargo, la Comisión considera que en nada le favorecen al recurrente para desvirtuar sus conductas identificadas al no hacer referencia directamente a ellas y que además fueron identificadas y sancionadas con estricto apego a derecho.

### **III.2.2 Anexo 2. Escrito de defensa entregado previamente durante el procedimiento sancionador.**

Esta prueba se desahoga por su propia y especial naturaleza; sin embargo, concatenada con todos los elementos de estudio en el presente recurso, en nada le favorecen al recurrente para desvirtuar sus conductas toda vez que son constancias que ya obran en el expediente y no se logran desvirtuar las conductas atribuidas al hoy recurrente al ser un documento con consideraciones personales y no elementos de prueba en su favor.

### **III.2.3 Anexo 3. Cartas testimoniales presentadas en la etapa inicial del procedimiento.**

Esta prueba se desahoga por su propia y especial naturaleza; sin embargo, concatenada con todos los elementos de estudio en el presente recurso, en nada le favorecen al recurrente para desvirtuar sus conductas toda vez que son constancias que ya obran en el expediente y no se logran desvirtuar las conductas atribuidas al hoy recurrente al no hacer referencia directamente a ellas.



Con base en los antecedentes, consideraciones y con fundamento en los artículos 1º, 3º, fracción VII, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 9, fracción IV, 16, fracción II, 29, 30, 31, y 32 del Reglamento del Alumnado, así como el Transitorio Cuarto de la reforma relacionada con la prevención, atención y sanción de conductas relacionadas con violencia por razones de género; esta Comisión considera que los argumentos descritos por el recurrente, así como sus pruebas resultan infundados e insuficientes, motivo por el cual propone a este Órgano Colegiado, el siguiente Dictamen:

## D I C T A M E N

**ÚNICO.** - Que, a partir del análisis de todos los elementos aportados, de manera fundada y motivada:

**Ratificar el Acuerdo DCNI-02-282-25 que resolvió, en su parte conducente:**

- “Aplicar al alumno F.M.B. [REDACTED], matrícula [REDACTED] alumno de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas la medida administrativa de Suspensión por dos trimestres, con fundamento en el artículo 16, fracción II del Reglamento del Alumnado.
- Con base en el artículo 28 del Reglamento del Alumnado, la Comisión recomienda por unanimidad, que la medida administrativa entre en vigor a partir del trimestre 25-Primavera.
- Requerir al alumno F.M.B. [REDACTED], matrícula [REDACTED] alumno de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas que acredite 4 cursos impartidos en la CONAPRED, la CNDH, CDHCDMX, Museo Memoria y Tolerancia, o Secretaría de las Mujeres. Las temáticas de los cursos deberán versar sobre los temas de Género, Masculinidades, Discriminación y Violencia simbólica. Una vez concluidos los cursos, deberá elaborar un ensayo que dé cuenta de su comprensión de los temas y de las consecuencias de las faltas cometidas, así como de su compromiso para corregir actitudes y comportamientos contrarios a los valores universitarios, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento del Alumnado.
- Solicitar el apoyo de las instancias institucionales para realizar una intervención especializada en los grupos de las UEA en donde concurre el alumnado involucrado, para generar ambientes universitarios libres de violencia por razones de género y

*discriminación, con fundamento en las Políticas 1.8 y 1.11 de las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por razones de Género.”*

#### VOTOS

Integrantes	Sentido del voto
Dr. Gerardo Pérez Hernández	A favor
Dra. Cynthia Gabriela Sámano Salazar	A favor
Dra. Daniela Aguirre Guerrero	A favor
C. Daniel Olvera Rojas	A favor
C. Alexandra Bonilla García	A favor
<b>Total de los votos</b>	<b>5</b>

#### Personas asesoras:

**Mtra. Isela Carolina Tinoco Marquina**  
Abogada Delegada de Legislación  
Universitaria

**Dr. Arturo Sotelo Gutiérrez**  
Defensoría de los Derechos  
Universitarios

**Coordinadora**

**Dra. Marcia Guadalupe Morales Ibarría**  
Secretaría del Consejo Divisional  
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

Firma: Con fundamento en el artículo 83, fracción V del Reglamento Orgánico

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN R.02.2025 QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE CONOCER Y DICTAMINAR SOBRE LAS FALTAS COMETIDAS POR EL ALUMNADO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA, SOBRE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR F.M.B. [REDACTED], MATRÍCULA [REDACTED] DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS APLICADAS.